

**Marcello Carmagnani**

## **Las finanzas de tres Estados liberales: Argentina, Chile y México, 1860-1910**

Las finanzas públicas de los países latinoamericanos tienen una característica común en el siglo XIX: la presencia de grandes déficit provocados, según lo han sostenido algunos estudiosos de ayer y de hoy, por un exceso de gastos y por recursos insuficientes. Algunos estudiosos han visto el tendencial desequilibrio entre ingresos y egresos públicos como el resultado de la incorporación de las economías latinoamericanas al mercado capitalista y la consiguiente necesidad de construir Estados fuertes, "nacionales"; otros lo han visto como el resultado de la dominación sobre el naciente Estado por parte de un grupo notabiliario, la oligarquía; y otros, más realistas, lo han visto como el resultado del carácter "abierto" que asumen las economías latinoamericanas a partir de la segunda mitad del siglo XIX (Carmagnani 1984). Estas tres posibles interpretaciones tienen un elemento común: relacionan las finanzas públicas con el costo del Estado que asume la clase dirigente liberal. Se termina así por olvidar que las finanzas públicas son el resultado de una política presupuestaria caracterizada por la posibilidad de sustituir ingresos por egresos y viceversa y se pone en cambio el acento casi exclusivamente sobre los egresos, los gastos públicos.

Si se observa la interacción entre ingresos y egresos públicos en Argentina, Chile y México, notamos que mientras en el caso argentino el déficit público es estructural a lo largo de todo el período 1864-1915, en el caso chileno y mexicano el fenómeno es limitado al período 1866-1893 para Chile y al período 1867-1894 para México. Después de 1893-94, mientras las finanzas chilenas alternan déficit y activos, las finanzas mexicanas están,

hasta la Revolución, permanentemente en activo. Tendencialmente en México los saldos activos fluctúan entre un mínimo de 4,9 % y un máximo de 34,3 % de los egresos totales.

El análisis comparado de las finanzas públicas de los tres países considerados nos permite pensar que el déficit crónico en Argentina, la inestabilidad chilena y los saldos activos mexicanos apenas permitieron financiar los gastos corrientes en Argentina y Chile, mientras en México se logró incluso reducir la deuda pública.

*Cuadro 1: Ingresos y egresos públicos en Argentina, Chile y México  
(tasas de incremento anual)*

Años	Argentina		Chile		México	
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos
1850-59	-	-	1,5	1,4	-	-
1860-69	5,2	3,7	2,9	3,1	6,9	6,6
1870-79	1,4	- 0,7	3,2	1,2	5,7	2,3
1880-89	4,9	2,9	1,0	3,5	6,7	17,4
1890-99	16,3	14,0	5,8	6,6	4,1	1,4
1900-09	26,3	23,9	10,6	7,4	6,6	5,1
1910-14	58,7	1,1	1,6	1,0	4,8	5,4

*Fuentes:* para Argentina: *Anuario, Argentina* (1905-1910); *Memoria de Hacienda, Argentina* (1880-1919); *Anuario estadístico, Argentina* (1894-1914); Lorini (1910: 111); *Registro estadístico, Argentina* (1869-71); Schmitz (1894: 198-211); para Chile: Carmagnani (1971: 197-202); para México: *Memoria de Hacienda, México* (1868-82 [1867-82]); *Cuenta del Tesoro Federal, México* (1883-1911).

La observación de nuestros tres casos nos dice justamente que mientras en Argentina y Chile la política presupuestaria se caracterizó por un crecimiento de los ingresos no proporcional a los egresos, en México la política de presupuesto se caracteriza, en cambio, por una más rápida expansión de los ingresos.

La diferencia apuntada es, sin embargo, engañosa pues si observamos con la debida atención el cuadro 1 notamos que en to-

dos los países el crecimiento de los ingresos precede, y a un ritmo mucho más rápido, la expansión de los egresos. El cuadro 1 nos induce a pensar que la política presupuestaria de los tres países tiene una característica común: frenar el crecimiento de los egresos aumentando la presión tributaria. Esto significa que existe, no obstante la falta de comunicación y de relaciones financieras estables entre los tres países latinoamericanos que consideramos, una cierta idea común de cómo gestar las finanzas públicas. Esta idea común es la doctrina hacendaria liberal y en ella trataron de inspirarse ministros de Hacienda argentinos, como Vicente Fidel López, chilenos, como Miguel Cruchaga, y mexicanos, como Matías Romero.

El objetivo de aumentar la presión fiscal no fue siempre realizable. Esta circunstancia pone en evidencia una escasa flexibilidad de las finanzas públicas y en modo particular de los ingresos estatales, caracterizados por una acentuada rigidez estructural. Este fenómeno, que nos ilustra indirectamente las diferencias nacionales en el funcionamiento financiero de los Estados liberales en América Latina, se presenta en forma más rígida en Argentina que en Chile y México. El incremento de los ingresos chilenos y sobre todo de los mexicanos a partir de los años 1890 fue mucho más rápido que el incremento de los ingresos argentinos.

*Cuadro 2: Ingresos públicos en Argentina, Chile y México, 1850-1910*  
(en porcentajes)

Años	Argentina						Chile			México			
	Aduanas			Otros			Aduanas			Aduanas			Otros
	Imp.	Exp.	Tot.	Imp.	Exp.	Tot.	Imp.	Exp.	Tot.	Imp.	Exp.	Tot.	
1850	-	-	-	-	-	-	59,0	41,0	-	-	-	-	-
1860	60,0	31,4	91,4	8,6	36,4	6,5	42,9	57,1	-	-	53,3	46,7	
1870	81,0	12,1	93,3	6,8	42,9	3,8	46,7	53,3	58,1	9,2	67,3	32,7	
1880	64,1	17,9	82,0	18,0	22,7	4,7	27,4	72,6	54,4	3,5	57,9	42,1	
1890	69,5	7,7	78,9	21,1	31,0	46,6	77,6	22,4	53,2	0,3	53,5	46,5	
1900	55,8	2,9	58,8	41,2	25,9	45,6	71,5	28,5	42,5	1,2	43,7	56,3	
1910	57,2	-	57,2	42,8	31,4	51,9	83,3	16,7	43,8	0,5	44,3	55,7	

*Fuentes:* Véase la nota del cuadro 1.

Nos podemos preguntar, a partir de las informaciones que presentamos en el cuadro 2, a cuáles factores es reconducible el diferente grado de rigidez de las finanzas públicas en nuestros tres países. La respuesta está, al parecer, en el alto porcentaje de los derechos aduaneros. Sin embargo es ésta una respuesta que no da ningún peso al proceso de transformación que conocen los ingresos, incluso los aduaneros, en nuestros tres países. En efecto, en dos países, Argentina y México, los derechos aduaneros en los ingresos totales disminuyen progresivamente pasando de 91,4 % a 57,2 % en Argentina y de 53,3 % a 44,3 % en México. La excepción es Chile, donde los ingresos aduaneros, por el contrario, aumentan pasando desde un 59 % a un 83,3 % de los ingresos totales.

Una mejor explicación del proceso de transformación de los ingresos públicos se obtiene desagregando los derechos aduaneros. Así notamos que la reducción de la participación de los ingresos aduaneros en los ingresos fiscales depende, tanto en Argentina como en México, de la progresiva eliminación de los derechos sobre las exportaciones mientras en Chile el aumento de los ingresos aduaneros depende de la mayor participación de los derechos de exportación de un producto, el salitre, que como sabemos no era realmente un impuesto de exportación sino más bien una renta del Estado.

Esta profunda transformación de los ingresos no es casual. No es una casualidad que el ministro de Hacienda de México declare en 1867 que uno de los objetivos de la reforma hacendaria era el de no hacer de los impuestos aduaneros la base del sistema fiscal (Carmagnani 1989: 473-74). Esto significa que la progresiva liberación de impuestos a los bienes exportados forma parte del ideario liberal de favorecer la circulación y aumentar la mercantilización de las economías.

El resultado final de la transformación fue el de estructurar en los tres países un sistema de ingresos públicos dependientes de la capacidad de consumo de bienes importados y de bienes internos. Con otras palabras, el sistema de las finanzas públicas comenzó a funcionar tratando de reducir, minimizar, la dependencia de los ingresos de los ciclos del comercio internacional.

En Argentina el proceso de progresiva diversificación de los ingresos públicos empezó un decenio antes de la crisis de 1890. Ya en los años 1880 la disminución de los ingresos obligó a buscar nuevos impuestos con el resultado de que entre 1884 y 1899, es decir en los años que preceden, acompañan y siguen la crisis de 1890, hay una tendencia hacia la progresiva reducción de los derechos aduaneros, especialmente sobre las exportaciones, y la introducción de nuevos impuestos sobre el consumo interno. Además de interrumpir el vínculo entre ingresos públicos y exportaciones, la década de 1880 se caracteriza también por la tendencial reducción de los derechos aduaneros sobre las importaciones. Este último tipo de impuesto, que se había revelado decisivo para la expansión de los ingresos estatales en el decenio 1860-1870, se estanca en la década siguiente y disminuye entre 1890 y 1900.

La ruptura de la interdependencia entre ingresos estatales y comercio exterior ilustra la precisa voluntad de la clase dirigente argentina de reducir la dependencia de las finanzas públicas del vínculo mercantil existente entre economía argentina y economía mundial, con el preciso objetivo de hacer más competitivas las exportaciones. Viene así a redefinirse el peso del comercio exterior en la evolución de la estructura financiera pública, peso que pasa de factor determinante a factor condicionante a partir de los años de 1890.

La búsqueda de nuevos recursos susceptibles de sustituir los impuestos sobre las exportaciones y garantizar la expansión de los ingresos públicos ilustra la capacidad de maniobra fiscal de la clase dirigente de los últimos decenios del siglo XIX. Si observamos el cuadro 2, notamos que entre 1880 y 1890 se registra un lento incremento de los ingresos clasificados como otros, es decir, de ingresos provenientes de actividades no vinculadas directamente con el comercio exterior. Esta tendencia se acelera a partir de 1890, con el resultado que ya en 1900 los ingresos públicos no dependientes del comercio exterior representan casi la mitad de los ingresos totales.

La crisis económica de 1890 permitirá a la clase dirigente argentina completar el proyecto financiero elaborado en los años de 1880. En 1890 el ministro de Hacienda Vicente Fidel López presenta al parlamento un proyecto de ley que establece una serie de nuevos impuestos directos sobre el alcohol, la cerveza, el tabaco y los fósforos. El mismo proyecto preveía también un impuesto sobre los dividendos y los beneficios de las sociedades anónimas argentinas y extranjeras, y sobre los contratos de seguro (Martínez 1898: 466; Dorfman 1970: 219).

*Cuadro 3: Estructura de los ingresos públicos argentinos, 1850-1912 (en porcentajes)*

	1888	1893	1896	1900	1905	1912
Renta patrimonial	6,8	3,9	7,2	10,6	5,4	3,3
Renta de servicios públicos	3,8	4,5	8,8	6,8	13,1	10,5
Impuestos directos	9,7	7,2	2,5	2,7	2,6	2,4
Herencias	8,2	6,7	2,4	2,5	2,4	2,1
Sociedades anónimas	1,5	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3
Impuestos indirectos	79,7	83,4	81,5	79,9	78,9	83,8
Aduanas	74,1	74,8	66,3	53,8	55,7	63,1
Consumos	5,6	9,6	15,2	26,1	23,2	20,7

*Fuentes: Anuario, Argentina (1905-1910); Memoria de Hacienda, Argentina (1880-1919); Anuario estadístico, Argentina (1894- 1914); Lorini (1910: 111); Registro estadístico, Argentina (1869-71); Schmitz (1894: 198-211).*

El proyecto presentado al parlamento en el momento más agudo de la crisis económica, trataba de transformar y modernizar la estructura financiera del Estado. El cuadro 3 muestra que la gran transformación se hizo privilegiando un sector social. La transformación debería haber provocado una expansión de los impuestos sobre las utilidades financieras y las ganancias especulativas, circunstancia que no se dio pues, como se puede observar en el cuadro 3, los impuestos directos disminuyeron cuantitativamente entre 1888 y 1893, disminución que

se acelera una vez superada la coyuntura crítica. Los recursos que en el decenio de 1880 se obtenían de los impuestos directos se consiguen enajenando el patrimonio del Estado (ventas de tierras, derechos sobre los muelles fiscales, ferrocarriles, etc.) y de la expansión de los servicios públicos (correos y telégrafos). Es justamente la renta de los servicios públicos la que se expande más rápidamente mientras la renta patrimonial se frena después de 1900.

*Cuadro 4: Estructura de los ingresos públicos mexicanos, 1870-1913*  
(en porcentajes)

	1878-9	1889-90	1893-4	1896-7	1900-1	1905-6	1912-3
Rentas patrimoniales	2,6	2,6	2,6	3,8	2,6	1,4	0,2
Renta de servicios públicos	4,3	3,4	4,3	3,7	5,5	5,3	6,0
Impuestos directos							
D.F. y Territorios	8,8	8,2	8,3	5,2	5,2	9,8	10,5
Impuestos indirectos							
Aduanas	58,7	55,0	42,4	45,4	45,1	47,8	43,5
Consumos	16,8	24,8	36,3	38,4	39,9	39,9	31,8

*Fuentes: Memoria de Hacienda, México (1868-82 [1867-82]); Cuenta del Tesoro Federal, México (1883-1911).*

La situación que hemos delineado para Argentina a partir de 1880 la volvemos a encontrar, casi en los mismos términos, en México. Como puede verse en el cuadro 4, los impuestos directos, que en México son los que derivan del control que ejerce el gobierno federal sobre el Distrito Federal y sobre los territorios de Baja California y Quintana Roo, tienden a reducirse a partir de los años 1890, reducción que es compensada por el aumento de las rentas patrimoniales y sobre todo por el que conoce la renta de los servicios públicos de correos y telégrafos. Es interesan-

te notar, especialmente para los impuestos directos que gravan la Ciudad de México, que es sólo en la fase terminal del Porfiriato cuando se recuperan a pesar que la gran expansión urbana acontece por lo menos un decenio antes, en los años de 1890.

*Cuadro 5: Estructura de los ingresos públicos chilenos, 1850-1910  
(en porcentajes)*

	1850	1860	1870	1880	1890	1900	1910
Renta patrimonial	-	1,2	14,9	16,3	15,9	18,9	18,0
Renta de servicios públicos	6,2	2,6	2,6	3,0	1,3	4,1	3,7
Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	0,2
Impuestos indirectos	79,9	83,8	72,5	55,4	79,5	77,0	78,1
Aduanas	60,6	63,9	55,8	41,9	78,7	77,0	77,4
Consumos	19,3	19,9	16,7	13,5	0,8	-	-
Otros	2,8	-	1,4	17,4	0,2	-	-

*Fuente:* Carmagnani (1971: 197-202).

El caso chileno ilustra, todavía con mayor fuerza, la precisa voluntad de la clase dirigente de utilizar la renta patrimonial y la renta de servicios públicos para evitar cualquier impuesto de tipo directo. En efecto, en Chile el salitre jugó un rol extraordinario en los años de 1880 y de 1890, como puede verse en el cuadro 5, pues la renta patrimonial, la venta de terrenos fiscales y de derechos mineros representó más del 15 % de los ingresos públicos totales. A diferencia de Argentina y México, los ingresos chilenos derivados del patrimonio estatal crecen muy rápidamente hasta representar en los primeros decenios de este siglo el 18 % de los ingresos públicos totales.

Si en nuestros tres países la reducida importancia de los impuestos directos está en relación con la posibilidad de expandir la renta del patrimonio estatal, ello significa entonces que la clase dirigente de los tres países se caracteriza también por una dimensión ideológica común, de tipo fronteriza. La conquis-



ta del desierto en Argentina, de la Araucanía y del Norte Grande en Chile, así como del Norte minero en México dan al aspecto fiscal del liberalismo una dimensión especial que no encontramos en la doctrina fiscal liberal europea.

Los cuadros 3, 4 y 5 ilustran también que la progresiva reducción de la dependencia de los ingresos públicos de los derechos aduaneros está en relación con la expansión, especialmente en Argentina y en México, de los impuestos indirectos sobre el consumo. Es sólo en Chile, por su excepcional situación derivada del salitre, que se reducen antes y se liquidan enseguida todos los impuestos sobre los consumos. En 1910 la renta salitrera representa el 51,9 % de los ingresos públicos totales.

La expansión de la venta salitrera en Chile jugó un rol similar a la crisis económica en Argentina y la reorientación político-económica que conoce México durante el Porfiriato. En Chile, la bonanza salitrera permitió cubrir la expansión del gasto público y a nivel de los ingresos favoreció la liberación de los demás bienes exportables sin tener que imponer nuevos impuestos. No sólo, los derechos de exportación sobre el salitre favorecieron además la abolición en 1880 del monopolio sobre el tabaco, que representaba más del 10 % de los ingresos públicos en los años de 1870, y crearon las condiciones para eliminar en 1880 las contribuciones de las casas comerciales (7,2 % de los ingresos públicos en 1887) y de la alcabala en 1889 (13,8 % de los ingresos públicos en 1887).

En Argentina y México observamos un notable crecimiento de los impuestos indirectos sobre el consumo en los ingresos públicos totales. Los impuestos indirectos sobre el consumo no representaban en Argentina, todavía en 1893, ni siquiera un 10 % de los ingresos públicos totales. Tres años más tarde, en 1896, han casi duplicado su participación, representando un 15,2 % de los ingresos totales. La participación de estos impuestos indirectos continua expandiendo, en forma más lenta, en los decenios siguientes. También en México observamos una tendencia similar: la mayor expansión acontece en los años de 1890 cuando los impuestos indirectos sobre el consumo llegan a re-

presentar casi un tercio de los ingresos públicos totales. Esta cuota la conservarán hasta fines del Porfiriato.

En Argentina y en México notamos así que la doctrina fiscal liberal, de acuerdo a la cual todos los ciudadanos deben participar en mantener el Estado según su capacidad de consumo, tuvo plena vigencia. No está de más recordar que Alberdi veía el principio de los impuestos indirectos como el "más conforme a sus principios, a los intereses que ella tiene en vista y a las circunstancias presentes del pueblo de la Confederación Argentina" y que este principio fue acogido en la Constitución de 1853 que establece que los impuestos directos constituyen un hecho excepcional (Alberdi 1858a: 229-230).

Los impuestos indirectos sobre el consumo afectaron más a las áreas urbanas que a las rurales, pues en 1896 los ingresos derivados de este tipo de impuesto fueron de 13,7 millones de pesos, de los cuales 5,3 millones se pagaron en el área de Buenos Aires, equivalente al 38,6 % del total, mientras que desde un punto de vista demográfico la capital federal representa apenas el 16,7 % de la población total.

La impresión de que los impuestos sobre el consumo afectaron mayormente a los grupos sociales urbanos, sobre todo a los emergentes, adquiere mayor fuerza si se analiza la relación entre el nuevo impuesto y los sectores productivos. El número de industrias afectadas por los impuestos sobre el consumo es de 949 fábricas de vino, 61 de cerveza, 131 de alcohol, un número impreciso de fábricas de cigarrillos y de fósforos y, a partir del nuevo impuesto sobre el azúcar, 51 ingenios. En 1899 estos establecimientos industriales poseían un capital de 101,9 millones de pesos, el 35,8 % de las inversiones totales en el sector industrial (Cortés Conde 1966: 76).

Situación muy similar es la que encontramos en México, donde a partir de 1892-1893 progresivamente los impuestos sobre el consumo – la renta del timbre –, afectan a los tabacos, más o menos manufacturados, a las bebidas alcohólicas y a los tejidos de algodón. Tabacos, alcoholes y tejidos representan el 16,0 % de renta interior en 1900-1901 y el 18,4 % en 1912-1913 (Carmagnani 1989).

En México, a diferencia de Argentina y a semejanza de Chile, vemos además la voluntad de imponer una carga fiscal sobre la producción minera, haciéndola aparecer como un impuesto interno indirecto. En 1900-1901 estos impuestos mineros indirectos representan el 14,1 % de los impuestos indirectos internos y el 13,1 % en 1910-1911. También estos impuestos mineros nacen como los otros en 1892-1893.

Más allá de las especificaciones nacionales, hay algunos elementos sorprendentemente comunes en estas tres experiencias relativas a la imposición de impuestos indirectos internos. En los casos analizados coinciden cronológicamente, así como cronológicamente coincide la progresiva eliminación de estos impuestos en Chile. En Argentina y México se concuerda que en este tipo de consumo debe recaer la carga tributaria, así como en Chile y en México se trata de golpear además los intereses del capital extranjero invertidos en la minería.

La forma que asume la percepción de estos impuestos internos que inciden sobre el consumo y sobre el capital extranjero nos puede agregar algo más. Uno de los más importantes observadores de la realidad social argentina de comienzo de siglo, Biale Massé, escribía en 1904:

La segunda muralla [al desarrollo de la inmigración] la construyeron los impuestos internos, o a lo menos su inicua distribución. Y el calificativo de iniquidad no es gratuito. Una caja de fósforos del pobre, vale un centavo y medio, paga de impuestos uno, o sea el 66 por ciento de su valor. Una caja de fósforos del rico, vale dos centavos y un tercio, y paga también un centavo de impuesto, o sea el treinta por ciento de su valor. Un paquete de cigarrillos del pobre, vale siete centavos y paga tres, o sea el 48 por ciento. Un paquete de clase media, que vale 15 centavos, paga 5, o sea el 33,3 por ciento. Un paquete de cigarrillos de lujo, que vale 23 centavos, paga 7, o sea 30,3 por ciento del valor. El paquete de 30 centavos, paga 10, o sea el 25 por ciento de su valor (Biale Massé 1904: 96-97).

A falta de otros elementos, podemos por lo menos apuntar que la transformación de los ingresos públicos asumió en los años de 1890 una orientación que José Luis Romero caracterizó

de liberalismo conservador y que nos parece ser el resultado de la progresiva disminución de tensión entre libertad y poder que había caracterizado la primera fase liberal no sólo en Argentina, sino también en Chile y en México, con la consecuencia de alterar el principio de equidad fiscal liberal.

El análisis comparado de los ingresos públicos de Argentina, Chile y México en la fase de construcción y de consolidación del Estado liberal nos ha permitido ver que las clases dirigentes de estos tres países presentan una racionalidad común, con el resultado que termina por desarrollar estrategias institucionales similares. La racionalidad que une las tres clases dirigentes es el producto del hecho de que el liberalismo, como ha escrito José Luis Romero (1981: 147), no es sólo una doctrina política sino más bien "una filosofía de vida, un sistema de ideales que configuraba la imagen que cada país se hizo de sí mismo". En efecto, es sorprendente notar como el elemento que une el liberalismo es un innato optimismo que a nivel hacendario se expresa en la idea de que los recursos del Estado son flexibles y crecientes: flexibles, porque la mayor mercantilización activa nuevos sectores productivos, y crecientes, porque la mayor mercantilización expande los ingresos públicos y los internaliza.

La renovación de la estructura de los ingresos públicos no es entonces un hecho técnico sino uno de los fundamentos económicos del Estado liberal, porque gracias a la transformación de los ingresos públicos se rompe el vínculo preexistente entre ingresos públicos y comercio exterior, dando vida a una estructura financiera estatal no dependiente de la ciclicidad del comercio exterior y, por lo tanto, tendencialmente autónoma de las exportaciones.

La búsqueda de una mayor autonomía financiera a partir de la transformación de los ingresos públicos fue vista por las clases dirigentes como la posibilidad de incorporar al Estado, en calidad de contribuyentes, a los sectores sociales que en el período formativo del Estado liberal habían tenido un rol no muy activo o totalmente pasivo. En esta forma la mayor autonomía financiera no tenía como finalidad la progresiva libera-

ción del Estado liberal de los intereses económicos y sociales que le habían dado nacimiento, sino el reforzamiento de su liderazgo con un consenso social más vasto. No es casual que encontremos una fuerte relación entre la defensa de los impuestos indirectos y una doctrina electoral del sufragio indirecto. Alberdi sostenía en las Bases que se podrá emplear "el sistema de elección doble y triple, que es el mejor medio de purificar el sufragio universal sin reducirlo ni suprimirlo, y de preparar las masas para el ejercicio futuro del sufragio directo" (Alberdi 1858b: 122).

La dimensión financiera – incorporación de nuevos nacionales y ciudadanos a través de la capacidad de consumo – y la dimensión política – incorporación de nuevos ciudadanos a través de un período de preparación al sufragio universal – se conjugan y se traducen en la práctica política en la incorporación de nuevos sujetos económicos y políticos bajo la tuición de la clase dirigente. En esta forma el Estado liberal adquiere, a partir de los años 1890, la característica de Estado liberal notabliario y oligárquico que conservará hasta los años de 1910.